

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA**  
**SALA DE DECISIÓN LABORAL**

**Dr. GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO**  
Magistrado Ponente

<b>Proceso</b>	<b>Ordinario Laboral</b>
<b>Radicado</b>	66001310500120190035202
<b>Demandante</b>	JUAN EUCLIDES ACEVEDO MOLINA
<b>Demandada</b>	COLPENSIONES - GERMAN y LUIS ALBERTO LONDOÑO MONROY
<b>Asunto</b>	Apelación y consulta <b>6 de diciembre de 2022</b>
<b>Juzgado</b>	Primero Laboral del Circuito
<b>Tema</b>	Pensión de vejez

**APROBADO POR ACTA No. 198 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2023**

Hoy, once (11) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral integrada por los magistrados Dra. **OLGA LUCIA HOYOS SEPÚLVEDA**, Dr. **JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ** y como ponente Dr. **GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto en contra la sentencia de primera instancia, así como el grado jurisdiccional de consulta ordenado a favor de Colpensiones en la misma providencia, proferida por el Juzgado Primero Laboral Circuito de esta ciudad dentro del proceso ordinario promovido por **JUAN EUCLIDES ACEVEDO MOLINA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y GERMÁN LONDOÑO MONROY y LUIS ALBERTO LONDOÑO MONROY**, radicado **66001310500120190035202**.

Seguidamente se procede a proferir la decisión por escrito aprobada por esta Sala, conforme al artículo 15 del Decreto No. 806 de 2020, adoptado como legislación permanente por la Ley 221 del 13 de junio de 2022, la cual se traduce en los siguientes términos,

**SENTENCIA No. 200**

**I. ANTECEDENTES**

**JUAN EUCLIDES ACEVEDO MOLINA** aspira a que se declare la existencia del contrato de trabajo con **GERMÁN LONDOÑO MONROY y LUIS ALBERTO LONDOÑO MONROY**, entre el 15-06-1992 y el 30-09-1996. En consecuencia, se les condene al pago de los aportes adeudados entre el 15-06-1992 y el 30-09-1996. De otro lado, solicita se le declare beneficiario del régimen de transición y, conforme a ello, se condene a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** a reconocerle la pensión de vejez, a partir del 28-07-2005, conforme al acuerdo 049-90, además de los intereses moratorios y las costas del proceso.

**Hechos.**

Los hechos que sustentan las pretensiones informan que Juan Euclides Acevedo Molina, nació el 28 de julio de 1945, cumpliendo los 60 años en el año 2005; es afiliado al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones desde el 15 de mayo de 1969; que es beneficiario del régimen de transición; que solicitó la pensión en diversas oportunidades, siendo negada por la demandada a falta del cumplimiento de tiempo de cotización.

Relata que prestó sus servicios a favor de German Londoño Monroy y Luis Alberto Londoño Monroy, propietarios del establecimiento de comercio **Calzado Gerlon** hoy **Gerlonis**, vínculo que inició el **15 de junio de 1992** y terminó el **30 de septiembre de 1996**; que la labor desarrollada era como Solador (fabricación de calzado); cumplía horarios de lunes a sábado de 7:00 am a 12:00 m y los días sábados de 7:00am a 11:00 am; que el salario para cada anualidad era el mínimo legal; que durante la relación laboral no fue afiliado por sus empleadores entre el 15 de junio de 1992 y el 18 de julio de 1994, pues solo se hizo desde el 19 de julio de 1994 y hasta el 31 de diciembre de 1994, posteriormente por Luis Alberto Londoño Monroy desde el 1 de enero de 1995 hasta el 30 de septiembre de 1996; que el 31-01-2017 solicitó a Colpensiones iniciar el cobro al ex - empleador de los aportes impagos y realizar la corrección en su historia laboral.

Asegura que en su historia laboral hay inconsistencias frente al patronal 91200830 (Luis Alberto Londoño O Calzado Gerlon) para los periodos:

**i)** 1-01-1996 al 30-09-1996 con un total de 15,57 semanas, cuando el total es 38.61 Semanas; **ii)** En los periodos 199511 199512 199601 en el campo observaciones se indica: “deuda presunta, pago aplicado de periodos posteriores” así mismo en los periodos 199605 199606 199607 199608 hasta 24/09/1996 reza: “pago aplicado a periodos anteriores”; **iii)** Que según el certificado de autoliquidación de aportes y la respuesta del Seguro Social del 2010, el actor tuvo cotizaciones como trabajador de Luis Alberto Londoño Monroy en los ciclos 01-1995 hasta 09-1996, presentando aportes por mora presunta del empleador y que Colpensiones no validó; **iv)** Según oficio DNCC 21685 de 2010, el ISS respondió requerimiento indicando que los ciclos reportados entre 1997-03 al 1997-10 se imputaban a periodos posteriores de los pagados con sus intereses moratorios calculados por la misma entidad; **v)** La historia laboral no contabilizó periodos en los que se hicieron los pagos: Del 01-09-2000 al 30-09-2000; Del 01-03-2001 al 31-05-2001 y del 01-01-2002 al 30-09-2002.

Solicitada nuevamente la pensión el 14-03-2018, le fue negada por resolución SUB86908 del 03-04-2018 a falta del tiempo de cotización; que sumadas las cotizaciones del 09-07-1987 al 27-07-2005 tenía **640.58**, el cual era suficiente, por ser beneficiario del régimen de transición.

La demanda fue radicada el 16-08-2019 y admitida por auto del 13-09-2019.

#### **Posición de las demandadas.**

La **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”**, se opuso a las pretensiones en su contra, considerando que el demandante había perdido sus derechos transicionales al no contar con las 750 semanas

del acto legislativo 1 de 200, sin contar además con los requisitos para obtener el derecho pretendido. Como excepciones formula **inexistencia de la obligación demandada, prescripción, buena fe, imposibilidad de pago de los intereses moratorios.** [archivo 16]

**GERMÁN LONDOÑO MONROY** y **LUIS ALBERTO LONDOÑO MONROY**, no contestaron la demanda, conforme el interlocutorio del 21-10-2021 (archivo 46).

## II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 6 de diciembre de 2022, se dispuso:

**PRIMERO:** DECLARAR que entre el demandante y GERMAN LONDOÑO MONROY, como empleador, existió una relación laboral entre el 5 de junio de 1992 al 18 de julio de 1994, periodo en el cual el empleador omitió afiliar al demandante al sistema de seguridad social en pensiones.

**SEGUNDO:** CONDENAR al señor GERMAN LONDOÑO MONROY al pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, desde el 31 de diciembre de 1992 al 18 de julio de 1994 en favor del señor JUAN EUCLIDES ACEVEDO MOLINA, mismos que deberán ser cancelados sobre un IBC del smmlv para cada anualidad y ante la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, estando en la obligación de solicitar además el cálculo actuarial para poder realizar dichos aportes.

**TERCERO:** ORDENAR a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, incluir en la Historia laboral del demandante, JUAN EUCLIDES ACEVEDO MOLINA los periodos en mora de su empleador LUIS ALBERTO LONDOÑO MONROY, correspondiente a los periodos de mayo, junio, julio y, agosto de 1995 – sic -, conforme a lo dicho en la parte motiva.

**CUARTO:** ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, que una vez cancelado el cálculo actuarial por parte del empleador GERMAN LONDOÑO MONROY, incluya en la historia laboral del demandante tales cotizaciones, conforme a lo indicado en la parte motiva

**QUINTO:** DECLARAR que el señor JUAN EUCLIDES ACEVEDO MOLINA, es beneficiario del régimen de transición y, como consecuencia de ello, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez conforme a los parámetros establecidos por el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año.

**SEXTO:** CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES al reconocimiento a favor del señor JUAN EUCLIDES ACEVEDO MOLINA, de la pensión de vejez causada el 31 de julio de 2010, bajo los parámetros del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el dcto 758 del mismo año y en cuantía del smlmv que para el año 2010 ascendía a la suma de \$515.000, la cual deberá ser incrementada anualmente conforme lo determine el Gobierno Nacional, con derecho a 14 mesadas pensionales al año, aclarando que dicho reconocimiento se encuentra supeditado al pago del cálculo actuarial que para el efecto debe realizar el señor GERMAN LONDOÑO MONROY, por los periodos en no aparece afiliación al sistema.

**SÉPTIMO:** DECLARA parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, en relación a las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 16 de agosto de 2016.

**OCTAVO:** ORDENAR, a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, proceda a efectuar el reconocimiento y pago a favor del señor JUAN EUCLIDES ACEVEDO MOLINA del retroactivo pensional, correspondiente a las mesadas pensionales causadas a partir del 16 de agosto de 2016 y hasta que se haga la inclusión en nómina, lo que a la fecha asciende la suma de \$72.959.702.

**NOVENO:** Para la expedición del acto administrativo, la inclusión en nómina del nuevo pensionado y el pago correspondiente de dicha pensión, cuenta la entidad demandada con el término de un mes contado a partir de la fecha en que se efectúe el pago del cálculo actuarial por parte del señor GERMAN LONDOÑO MONROY, por los períodos en no aparece afiliación al sistema del actor, y que el actor radique en sus instalaciones la respectiva cuenta de cobro o los documentos pertinentes, previa ejecutoria de esta decisión

**DECIMO:** AUTORIZAR a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES para que descuente del retroactivo pensional a reconocer a favor del demandante, el porcentaje por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, le corresponde en la forma indicada en la parte considerativa.

**DÉCIMO PRIMERO:** ABSTENERSE de imponer condena al pago de intereses moratorios y de costas procesales a COLPENSIONES, conforme a lo dicho en la parte motiva.

**DÉCIMO SEGUNDO:** CONDENAR al pago de las costas procesales al señor GERMAN LONDOÑO MONROY y a favor del demandante, las que se liquidarán en la oportunidad procesal pertinente.

**DÉCIMO TERCER:** CONDENAR al pago de las costas procesales al demandante JUAN EUCLIDES ACEVEDO MOLINA y a favor de LUIS ALBERTO LONDOÑO MONROY, las que se liquidarán en la oportunidad procesal pertinente.  
....”

En este caso, frente a la mora que se alega se presentó para los periodos del **11-95**, **12-95**, **01-96** y del **05-96** al **08-96**, hasta el 24-09-96, concluye que revisada la historia laboral (pág. 376, archivo 16), advertía que los periodos 11-95 a 01-96 con calzado Gerlón, se encontraba con anotación de deuda presunta – pago aplicado a tiempos posterior sin reporte de salario -, por lo que para ese caso debía tenerse en cuenta las cotizaciones sobre el salario mínimo, teniendo en cuenta que el trabajador aceptó recibir dicha suma por el tiempo en que sirvió a sus empleadores.

Refiere, que posteriormente se hicieron aportes en los ciclos **05-96** a **08-96** pagados como mes vencido y registro de afiliación o relación laboral, sin reporte de retiro del sistema pero con anotación de pago aplicado a periodos anteriores sin que estos estuvieran acreditados para la sumatoria de semanas en la historia laboral, infiriendo que si bien los demandados contaban con igual número de aportante, reportó periodos en mora de **11-95** al **01-96**, y continuó cotizado ininterrumpidamente **02-96** hasta **08-96**, optando

Colpensiones frente a los pagos de mayo a agosto de 1996, por cubrir con ellos la mora de los periodos indicados a efectos de lograr acreditar los mismos para el cálculo de las semanas cotizadas a favor del demandante, razón por la que no se incluyeron esas últimas cotizaciones y sin que hubieran sido anotadas como una presunta mora.

De acuerdo con la testimonial y el interrogatorio de parte, daban cuenta de la existencia de la relación laboral a favor de los demandados, siendo admitido por uno de los interrogados que el demandado afilió al trabajador con el taller desde 1994, por lo que no se desconoció la existencia del contrato de trabajo, aspecto corroborado por el testigo traído a juicio. Concluye de dichos medios de prueba que la relación laboral tuvo lugar desde **01-1995** hasta **08-1996**, por lo menos con el empleador Luis Alberto Londoño de lo cual se observó que Colpensiones incurrió en su deber de custodia y precisión de la historia laboral. Además, de la mora, no se acreditó que Colpensiones hubiera realizado la acción de cobro, teniendo en cuenta que el actor laboró para dicho empleador entre 1995 y 1996, y la demandada no hizo las acciones de cobro.

Por los ciclos 05 a 08-1998, los periodos deberán ser contabilizados en su totalidad.

Luego, de 06 a 09-96 obran cotizaciones fueron canceladas el 30-10-2018 por el mismo demandante, las que no pueden ser contabilizadas para los periodos que se pretendió imputar porque no se afilió, ni se reportan semanas en mora, frente a los cuales no se pueden hacer acciones de cobro, ni aplicar a tiempos retroactivos por ser aportes de un trabajador independiente.

09-2000, 03 a 05-2001 y de 01 a 09-2002 que corresponde al fondo prosperar, dijo que conforme a la certificación expedida este estuvo vinculado como independiente urbano entre el 01-04-00 hasta el 31-03-03, siendo el motivo de retiro el no pago de aportes cumplidamente y, luego fue afiliado por segunda vez el 01-12-03 al 15-07-10, retirado por cumplir los requisitos de exigibilidad del subsidio. Al revisar el reporte de semanas, aparece en dichos interregnos (05/00, 09/00 y 12/00, 01 a 07/01, 10/02 y 12/02 y 01/03) devoluciones del subsidio al estado por Dec. 3771. Por ello, no se puede tener en cuenta tales periodos porque el demandante no pagó el aporte que estaba a su cargo.

En cuanto a la falta de afiliación, **15-06-1992** al **30-09-1996**. Atendió que el trabajador fue afiliado a Colpensiones 19-06-1994 y de retiro el 31-12-1994. Desde 01-1995 a 08-1996 se hicieron cotizaciones a favor del demandante.

En cuanto a la existencia de la relación laboral y la falta de afiliación, al analizar el interrogatorio y el testimonio traído a juicio, concluyó que era creíble que el accionante estuvo vinculado laboralmente sin que fuera afiliado al sistema pensional, ello de acuerdo con la concordancia que encontró en el testimonio traído a instancia actora y el interrogatorio absuelto por uno de los demandados y, comoquiera que no se pudo determinar una fecha cierta, por aproximación, determinó que existió vínculo laboral entre el 31 de junio de 1992 – sic - al 18 de julio de 1994, los cuales deberán ser contabilizados por Colpensiones y disponer el cálculo actuarial.

Estableció que la demandante era beneficiaria del régimen de transición, cumpliendo con el requisito de la edad., sin que fuera exigible los requisitos del acto legislativo de 2005, en el caso, demostró que era tenía derecho a la

pensión al contar con 567 fueron en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, reconocimiento que se supeditaba al pago del cálculo actuarial por parte del Sr. Germán Londoño Monroy, en tanto que fue este quien fungía como empleador del actor para el tiempo en que se dejó de afiliarse y pagar los aportes. En cuanto a la fecha de disfrute, al no obrar prueba de la desafiliación, se tenía en cuenta la última cotización, es decir, a partir del 1 de agosto de 2010, teniendo en cuenta que venía solicitando la prestación. La mesada lo sería sobre el mínimo legal, según la liquidación del IBL con el promedio de los últimos 10 años y con derecho a las 14 mesadas.

Encontró prescritas las mesadas frente a aquellas causadas con antelación al 16-08-2016, teniendo en cuenta la presentación de la demanda (16-08-2019).

### III. RECURSO DE APELACIÓN

**Juan Euclides Acevedo Molina.** A través de su apoderada recurrió la decisión en la que manifestó su desacuerdo con que la pensión del demandante se hubiere supeditado a que el codemandado Londoño Monroy pague el cálculo actuarial que le corresponde asumir, pues con la sentencia Colpensiones cuenta con un título para realizar el respectivo cobro coactivo. De mantener la orden, considera que se continuará dilatando el reconocimiento de su prestación la cual lleva 17 años intentando el pago efectivo frente a un empleador que ha incumplido reiteradamente con sus obligaciones y con Colpensiones que no ha realizado una eficiente salvaguarda de la información del afiliado.

De otro lado, recurrió la negativa de los intereses moratorios porque si bien Colpensiones se pronunció sobre el derecho en diferentes actos administrativos negando el derecho, también lo era que estando obligado el codemandado al pago del cálculo actuarial ello significaba que ello involucraba la mora o la tardanza que tendría del empleador en ese pago, dinero que contempla no solo la cotización reportada sino también el valor de los intereses y la tasación de los frutos del dinero adeudado para la época debieron obtener, por lo que una vez Colpensiones reciba dichos dineros, los efectos es que las semanas se deberán imputar como tiempos válidos pero ello también hará parte de los tiempos con que se calcula o se financia la pensión de vejez, frente a lo cual se deben reconocer sus intereses, sea porque los asuma la administradora o el codemandado, por lo que en ese cálculo actuarial se deberá incluir toda la mora que el trámite administrativo le ha causado perjuicios al demandante.

Así mismo, recurrió la prescripción al considerar que la demora no se puede asignar en un 100% a Colpensiones, pero lo cierto es que el ISS no cumplió con la obligación de guardar de forma correcta la información de aportes realizadas por el actor, situación que lo llevó a confusiones. Que el expediente reposa pruebas de actos administrativos señalando diferentes número de semanas cotizadas, entre ellas, la resolución 02560 que resolvió la revocatoria directa de 3 de mayo de 2010 donde se indicó que el demandante contaba con 426.86 semanas en los últimos 20 años y, la resolución 000402 del 29-01-2017 donde señala que contaba con 445 semanas y así, se encuentra información diversa que denotan que no se cumplió con la obligación de custodia de la información, situación que generó confusión y solo identificó a través de apoderado y, por esa misma razón, recurre la no aplicación de costas

a cargo de Colpensiones porque hizo incurrir en desinformación y errores al actor, ocasionando un despliegue administrativo por espacio de 10 años.

**Germán Londoño Monroy**, a través de su vocero judicial recurrió la decisión frente al periodo al que fue condenado 06-1992 al 07-1994 porque fue con base en el testigo el cual, a su juicio, presenta dudas frente a los extremos de la relación, en todo caso, insiste que en ese periodo el actor no laboró con el demandado y solo inició en agosto de 1994.

**Colpensiones** recurrió la decisión respecto de la acreditación del tiempo que se dijo que el demandante trabajó para el codemandado y con el cual se ordenó el cálculo actuarial, por lo que era del caso analizar la declaración del señor Manuel Antonio Marín sino también las rendidas por Luis Alberto Londoño a efectos de establecer si guardan consonancia con los tiempos descritos, pues este último indicó que para el año 1994 inició a trabajar en el Establecimiento de comercio Gerlon de propiedad de su hermano para ese momento e indica que para febrero de 1994 empezó a prestar labores en el establecimiento y para esa época no se encontraba vinculado aún el demandante. Por ello, considera que al ser ese periodo de tiempo el que se debe incorporar el cálculo actuarial por cuenta de Germán Londoño y que permite acceder a la pensión debía ser revisado por parte de la Sala.

De otro lado, conforme a lo consagrado en el art. 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS) la Sala estudiará el fallo del a quo, en grado jurisdiccional de consulta, en lo que no fue objeto de la apelación por Colpensiones.

#### **IV. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Como la finalidad de esta etapa es atender la persuasión fáctica y jurídica sobre el tema objeto de discusión, bajo ese espectro se atienden los alegatos que guarden relación directa con los temas debatidos. Para tal efecto, el traslado se dispuso mediante fijación en lista del 21-02-2023 y de la presentación de alegaciones en término, se remite a la constancia de la Secretaría de la Sala (archivo 07).

Surtido el trámite que corresponde a esta instancia procede la Sala de decisión a dictar la providencia que corresponde, previas las siguientes,

#### **V. CONSIDERACIONES**

Del anterior panorama, se tiene que los problemas jurídicos por resolver se centran en: i) Establecer cuál es el hito inicial de la relación laboral con el señor Germán Londoño Monroy; ii) Revisar la historia laboral y determinar los tiempos que se deben atender para constatar si el demandante logró edificar la pensión de vejez objeto de demanda; iii) De establecerse el derecho a la pensión, se deberá analizar si hay lugar a los intereses moratorios y; iv) Establecer a partir de cuándo puede entrar el demandante a disfrutar la prestación, teniendo en cuenta el fenómeno de la prescripción y de existir cálculo actuarial, se deberá revisar si el reconocimiento debe supeditarse al pago del cálculo actuarial y, v) en lo no recurrido por Colpensiones, se deberá revisar la sentencia conforme al grado jurisdiccional de consulta que opera a su favor.

## **De la relación laboral y los hitos.**

Para iniciar, es de indicar que la Jurisprudencia especializada en esta materia ha sido uniforme al plantear que un contrato de trabajo se configura por la concurrencia de los tres elementos esenciales a saber: i) la actividad personal de servicio del laborante; ii) la presencia del salario como retribución por el servicio prestado y, iii) la continuada subordinación que faculta al empleador para exigir al trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo y cantidad de trabajo e imposición de reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Dichos elementos, de ser reunidos, se entiende que la relación entre las partes es de carácter laboral sin que deje de serlo por razón del nombre que se le dé, ni por las condiciones o modalidades que se le agreguen [Arts. 23 CST].

Para la determinación de los hitos, la jurisprudencia ha enseñado que, no debe confundirse la presunción del art. 24 CST, con una liberación probatoria del trabajador, pues éste sigue ligado al deber procesal de la prueba, dado que tiene que llevarle al Juez los elementos necesarios para comprobar otros aspectos importantes de la relación, tales como la remuneración y los extremos de la relación. Frente a esta última, la Corte en sentencia SL359-2023 orientó:

“... para que se imparta condena en concreto, el promotor del proceso tiene unas cargas mínimas probatorias a efectos de obtener las consecuencias jurídicas que pretende. Así, aún con la activación judicial de la referida presunción legal y sin que la misma se desvirtúe, es relevante que en el proceso se acrediten otros hechos imprescindibles para la prosperidad del reclamo, como los extremos temporales de la relación, el salario, la jornada laboral y el tiempo suplementario -si se alega-, así como los demás hechos que se enarbolean como causa de las pretensiones demandadas (CSJ SL, 6 mar. 2012, rad. 42167).

“Ahora bien. Eso no significa que los supuestos que terminen acreditados en el proceso, deban ser un calco de lo pretendido desde un comienzo por el demandante, como condición para activar la tutela judicial invocada. No puede perderse de vista que la jurisprudencia ha enfatizado, que los jueces no pueden supeditar su decisión a la demostración estricta de los extremos temporales pretendidos o del salario enunciado en la demanda pues, si en el plenario hay prueba de un tiempo de servicio inferior o de un salario menor al que se refirió, tienen el deber de dictar condena minus petita (CSJ SL3126-2021).

[...]

El error de juicio jurídico del ad quem brota diáfano. Su equivocación radicó, precisamente, en descartar cualquier posibilidad de protección de los derechos laborales reclamados, bajo el prurito de que a ese propósito solo podía servir la demostración de los extremos temporales informados en el texto de la demanda; ninguno otro, así fuera inferior. Con ello, ignoró la posibilidad que tenía de acudir a las tesis planteadas por esta Sala de la Corte en sentencias CSJ SL2696-2015 y CSJ SL4816-2015.

Según la primera providencia, en los eventos en que se dificulte la prueba de los hitos temporales, el juzgador debe acudir a los datos que ofrezcan los elementos de convicción incorporados y, de ser posible, para efectos de determinar la fecha de inicio, tomar en cuenta el último día del mes o año del que se tenga noticia y, para la fecha de terminación, el primer día, según corresponda. [...]».

Para acreditar dichos aspectos, se escuchó en interrogatorio al codemandado **Luis Alberto Londoño Monroy**, extrayéndose de tal diligencia lo siguiente:

Aceptó haber conocido al demandante como trabajador del establecimiento de comercio que era de propiedad de él y de su Hernando Germán Londoño Monroy; que fungió como zapatero montador de calzado para dama, cumpliendo horarios entre 8am o 9am hasta las 5pm o 6pm; el salario era conforme a la labor; el codemandado es actual propietario del calzado Gerlon; que la fábrica ya estaba en funcionamiento cuando él regreso de USA y se empezó a empaparse del negocio frente a lo cual refiere que pudo ser desde febrero de 1994; que fue copropietario del establecimiento por espacio de 4 años. Refiere que, a su llegada, afilió a los trabajadores a pensión, sin haber sido requeridos por el ISS o Colpensiones. Asegura que solo después de que él inicio en febrero/94, aproximadamente a mediados de ese año es que recuerda que empezó a trabajar el demandante. Comenta que su hermano inició primero con el negocio del calzado y luego se hicieron socios; que el negocio tuvo como 6 o 7 empleados para la época, funcionando en Pereira en la Cra. 8 con Cll. 11 de Pereira, luego en Dosquebradas.

Por su parte, en testimonio al Sr. **Manuel Antonio Marín Cárdenas**, quien trabajó para los demandados en calzado Gerlon desde **1988**, primero con Germán cuando inició el taller y luego, cuando los hermanos se hicieron socios hasta aproximadamente **1997**, frente a los hechos objeto de controversia dijo:

Que fue excompañero de trabajo de Euclides en el taller; ambos fueron soladores, siendo el trabajo era a destajo o al contrato. Que Euclides inició labores aproximadamente en los años 90, y aunque no tenía certeza de la fecha, dijo que fue en 1992, lo cual reiteró al denotar que Euclides inició a trabajar 4 años después de él, tiempo en que estaba solo Germán como propietario, pues fue después que llegó Luis Alberto, sin recordar bien la fecha pero que ello pudo ser en 1995. Resalta el deponente que, a su retiro en 1997, Luis Alberto ya no estaba, pues aquel (codemandado) pudo haber estado aproximadamente dos años en el establecimiento comercial. Comenta que inicialmente a los trabajadores no los vinculaban a pensión, con el correr de los años ya los iban afiliando; que eran cerca de 8 trabajadores y dijo no tener certeza si Euclides salió antes o después de él; que se ingresaba a las 7am aproximadamente hasta las 8pm o 9pm; que el demandante trabajó sin interrupciones.

En el presente asunto, no hay duda de que el demandante prestó sus servicios personales a favor de **German Londoño Monroy** propietario del establecimiento de comercio **Calzado Gerlon** hoy **Gerlonis**, lo cual se deduce de los dichos del Sr. Luis Alberto Monroy y con el testimonio del señor Manuel Antonio Marín Cárdenas, prestación del servicio que activa la presunción de la existencia de un contrato de trabajo, mismo que no fue desvirtuado por quienes tenían la carga probatoria de hacerlo.

Pues bien, de acuerdo con el interrogatorio y el testimonio traído a juicio, se tiene que si bien el co-demandado arguyó que recuerda al demandante trabajando a mediados de 1994, año en que aproximadamente empezó como socio de su hermano en calzado Gerlon, lo cierto es que también advirtió que dicho establecimiento venía funcionando desde antes de ello, pues él (Luis Alberto) solo fue socio a su regreso del extranjero. Dicho aspecto fue ratificado por el testigo Manuel Antonio Marín Cárdenas quien trabajo desde que inició la actividad comercial de Germán Londoño Monroy en el año 1988, dando cuenta que fue 4 años después que ingresó a trabajar el demandante, lo que se remonta al año **1992**, por lo que se tendrá como hito inicial el último día de esa anualidad que corresponde al **31-diciembre-1992**, sin que sea posible

tener como tal el año 1995 que refirió el codemandado porque sería admitir que puede construir su propia prueba.

En síntesis, se arriba a la conclusión a que la relación laboral que existió entre el demandante **Juan Euclides Acevedo Molina** y **Germán Londoño Monroy** a lo sumo inició el **31 de diciembre de 1992**, sin que para efectos del recurso interese el extremo final por cuanto no fue cuestionado. De allí, es que, ciñéndonos al periodo cuestionado por las demandadas, esto es, el tiempo que va desde el 5 de junio de 1992 y el 18 de julio de 1994, conforme lo establecido en líneas anteriores, se modificará el ordinal primero de la decisión de primera instancia estableciendo el hito inicial desde la data antes indicada.

### **De los aportes en mora y de la falta de afiliación.**

La Jurisprudencia ha planteado que los aportes en mora en contraste con la falta de afiliación tienen causas y consecuencias jurídicas diferentes<sup>1</sup>. Al respecto, la Sala ya se pronunciado<sup>2</sup> frente al tema en las que, parafraseando, las enmarca así:

Con relación del primero, precisa que la validez de las semanas cotizadas no puede ser desconocida por el ente de seguridad social sino acredita que adelantó las acciones tendientes a gestionar su cobro, pues no es posible trasladarle exclusivamente la responsabilidad de la mora a los empleadores. En caso de no haberse adelantado el cobro coactivo por la entidad de seguridad social, la consecuencia es que debe asumir el pago de la prestación debido a que el afiliado no es quien deba cargar con la consecuencia de la falta de gestión de quien tiene la posibilidad y las herramientas jurídicas para haber obtenido el respectivo pago.

Frente a la falta de afiliación al sistema por omisión del empleador, la Administradora de pensiones solamente puede reconocer al trabajador el tiempo servido siempre que se le traslade el cálculo actuarial (inciso 6, Art. 17. Dec. 3798/2003) a cargo del empleador que omitió la afiliación, a satisfacción de la AFP (Art. 33, L. 100/1993), pues la omisión del empleador causa perjuicios al trabajador porque en principio, impide que el sistema asuma el riesgo de vejez al no poder acreditar el número de semanas por el tiempo servido. En estos eventos, el interesado debe acreditar que laboró al servicio del empleador omisivo para generar el derecho a que los tiempos le sean computados válidamente por el ente de seguridad social, previo traslado del título pensional por el deudor.

En el presente asunto, de acuerdo con la historia laboral actualizada al 21-08-2018, los tiempos acreditados se resumen en el siguiente cuadro:

APORTANTE	DESDE	HASTA	SEMANAS	TOTAL	Acum
SIN NOMBRE	15-may-69	25-oct-69	23,43	23,43	<b>23,43</b>
PABLO EMILIO CEBALLO	06-mar-72	01-sep-72	25,71	25,71	<b>49,14</b>
GUZMAN SANIN JAIRO	09-jul-87	15-nov-90	159,86	159,86	<b>209,00</b>
MUÑOZ MEJIA NOHEMY	14-mar-91	25-oct-91	32,29	32,29	<b>241,29</b>
LONDOÑO GERMAN	19-jul-94	31-dic-94	23,71	23,71	<b>265,00</b>
LUIS ALBERTO LONDONO	01-feb-95	30-dic-95	51,43	51,43	<b>316,43</b>
CALZADO GERLÓN / LUIS A. LONDOÑO	01-ene-96	30-ago-96	15,57	15,57	<b>332,00</b>
JUAN EUCLIDES ACEVEDO MOLINA	01-abr-00	30-jul-10	429,00	429,00	<b>761,00</b>

<sup>1</sup> SL-14388 (43182), nov. 12/15, M. P. Rigoberto Echeverri Bueno

<sup>2</sup> Sentencia del 07-05-2018, Rad. 66001-31-05-001-2015-00334-01. M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón

Ahora bien, en lo que respecta a la falta de afiliación, como puede notarse, al establecerse la relación laboral desde el 31 de diciembre de 1992 hasta el 30 de agosto de 1996, al cotejar los periodos en que el trabajador estuvo afiliado, esto es, entre el 19 de julio de 1994 y el 30 de agosto de 1996, es claro que se incumplió con la afiliación al sistema entre el **31 de diciembre de 1992** y hasta el **18 de julio de 1994** que corresponde a **80,17 semanas** que sumadas a las **761** acreditadas en la historia laboral, asciende a **841,71 semanas**.

Por lo anterior, el ordinal segundo de la parte resolutive de la sentencia se modificará parcialmente en el sentido de disponer que Colpensiones realice el cálculo actuarial correspondiente y, el obligado deberá realizar el pago que le sea señalado por Colpensiones.

En cuanto a la mora de aportes, se tiene que a través del aportante Calzado Gerlon / Luis Alberto Londoño, la afiliación al sistema estuvo vigente entre 01-1995 hasta 08-1996. Luego, al revisar la historia laboral, allí obra que no fueron acreditadas cotizaciones de **06-1996** a **08-1996** que corresponde a **12,86 semanas** que deben ser adicionados 841,71 semanas antes citadas, por lo que en total el demandante cuenta con un rigor de **854,57 semanas en total**. Lo anterior, porque los ciclos **1995-11** a **1996-01** aparece en la relación de pagos como “*deuda presunta, pago aplicado de periodos posteriores*” a la par que los ciclos **1996-06** a **1996-08** cuentan con la anotación “*pago aplicado a periodos anteriores*”, aspecto que corresponde a un acto arbitrario de Colpensiones al modificar la historia laboral del afiliado para cubrir tiempos anteriores en mora por el mismo empleador sin realizar el cobro posterior de los mismos como era su obligación, y por ello, los citados ciclos aparecen en cero, es decir, como no cotizados, siendo ello la razón por la cual deben ser contabilizados en este caso en particular.

APORTANTE	DESDE	HASTA	SEMANAS	TOTAL	Acum
SIN NOMBRE	15-may-69	25-oct-69	23,43	23,43	<b>23,43</b>
PABLO EMILIO CEBALLO	06-mar-72	01-sep-72	25,71	25,71	<b>49,14</b>
GUZMAN SANIN JAIRO	09-jul-87	15-nov-90	159,86	159,86	<b>209,00</b>
MUÑOZ MEJIA NOHEMY	14-mar-91	25-oct-91	32,29	32,29	<b>241,29</b>
LONDOÑO GERMAN	19-jul-94	31-dic-94	23,71	23,71	<b>265,00</b>
LUIS ALBERTO LONDONO	01-ene-95	30-dic-95	51,43	51,43	<b>316,43</b>
CALZADO GERLÓN / LUIS A. LONDOÑO	01-ene-96	30-ago-96	15,57	15,57	<b>332,00</b>
JUAN EUCLIDES ACEVEDO MOLINA	01-abr-00	30-jul-10	429,00	429,00	<b>761,00</b>
<b>LONDOÑO GERMAN + CALCULO ACT.</b>	<b>31-dic-92</b>	<b>18-jul-94</b>	<b>80,71</b>	<b>80,71</b>	<b>841,71</b>
<b>CALZADO GERLON Y/O LUIS ALBERTO LONDOÑO</b>	<b>01-abr-96</b>	<b>30-ago-96</b>	<b>12,86</b>	<b>12,86</b>	<b>854,57</b>

Por lo anterior, se modificará el ordinal tercero porque, de un lado, el año en el que se observaron ciclos en mora no corresponde al anotado en dicho numeral, pues allí se hace referencia al año 1995 cuando en realidad, corresponde al año 1996 y, de otro lado, el mes de mayo de 1996 fue debidamente acreditado y contabilizado en la historia laboral.

### **De la pensión de vejez - régimen de transición.**

Es de recordar que son beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, quienes al 1 de abril de 1994 cuenten con un mínimo de 35 años si es mujer, o **40 años si es hombre**, o aquellas personas que, a igual calenda, hubieran acreditado tener 15 años o más de servicios cotizados.

Dicho beneficio transicional, conforme al acto legislativo 01 de 2015 no puede extenderse más allá del **31 de julio de 2010**, salvo para los afiliados que a la

entrada en vigencia del referido acto legislativo (29 de julio de 2005), tuvieron al menos 750 semanas, caso en el cual, el régimen de transición se extendió hasta el **31 de diciembre de 2014**.

De otro lado, el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 dispone, que tienen derecho a la pensión de vejez quienes acrediten: “**(a)** Sesenta (60) o más años si se es varón (...)” y, “**(b)** Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.

Conforme lo anterior, en este caso se concluye que el demandante tiene derecho a la pensión de vejez, conforme al acuerdo en cita, por las siguientes razones:

**(i)** El Sr. Acevedo Molina nació el **28 de julio de 1945** por lo que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 – 1 de abril de 1994- contaba con 48 años, 8 meses y 4 días, es decir, contaba con más de 40 años a la citada data;

**(ii)** La edad mínima de 60 años fue alcanzada por el demandante el **28 de julio de 2005**.

**(iii)** El demandante entre el **15 de mayo de 1969** y el **30 de julio de 2010**, contabiliza un total de **858.86 semanas**, siendo estas: **761** semanas contabilizadas en la historia laboral válida para prestaciones económicas (archivo 16, pág. 376); **80,71** semanas que corresponden al cálculo actuarial a cargo del empleador codemandado Germán Londoño y **12.86** semanas que corresponde a los tiempos en mora en los que el demandado no cumplió con la gestión de cobro y por tanto se deben acreditar, tal y como ya quedó planteado.

**(iv)** Si bien es cierto que el accionante no cumple con el requisito de las 1000 semanas del citado acuerdo, lo cierto es que aglutinó un total de **500** semanas de las **558,71** con que cuenta en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, esto es, entre el **28 de julio de 1985** y el **28 de julio de 2005**, tiempos que corresponden a: 465.14 que aparecen contabilizadas en la historia laboral (del 09-07-1987 y el 28-07-2005), a las que se suman 80.71 semanas que corresponden al cálculo actuarial por los tiempos trabajados sin afiliación (del 31-12-1992 al 18-07-1994) y se le adicionan **12,86** de los tiempos que aparecen en mora y que por la falta de gestión de cobro se deben acreditar en la historia laboral.

**(v)** Comoquiera que el derecho se causó el 28-07-2005, esto es, antes de entrar en vigor el acto legislativo 01/2005, aunado a que la última cotización lo fue el 30-07-2010, al demandante no le es exigible el requisito de las 750 semanas al 29-07-2005, por lo que mantuvo los derechos transicionales.

Significa lo anterior que había lugar a reconocer al accionante la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, en virtud del régimen de transición, pues como se advirtió el actor al cumplimiento de la edad (28-07-2005) había alcanzado 563 semanas en los 20 años anteriores a dicha calenda, es decir, superando las 500 exigidas en el citado acuerdo. Por lo anterior, se confirmará el ordinal quinto de la sentencia, el cual declaró dicho derecho.

En cuanto al disfrute, es de indicar que el último aporte realizado por el demandante realizado a través del régimen subsidiado, data del 30-07-2010 (archivo 16, página 832), en tanto que realizó nueva solicitud pensional el 08-05-2012, razón por la cual el disfrute se entiende a partir del mes siguiente al cese de los aportes, esto es, a partir del **1 de agosto de 2010**, por lo que se modificará la decisión de primera instancia en ese sentido, pues tuvo como disfrute el 31 de julio de 2010.

De cara al monto inicial de la mesada, si bien sería del caso considerarse lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en lo que atañe al Ingreso Base de Liquidación (IBL), en lo relativo a la tasa de reemplazo, lo cierto es que de acuerdo con los aportes realizados por el demandante es claro que siempre lo fueron sobre el Salario Mínimo, lo que implica que acierta la primera instancia en dicho aspecto.

### **De la prescripción.**

Para resolver, se tiene que el artículo 151 del CPTSS establece que el término de prescripción es de tres años, el cual se contabiliza desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, pudiendo ser interrumpido con el simple reclamo del trabajador, por un lapso igual. En tanto que el artículo 489 del CST indica que, la interrupción se da por una sola vez, debiendo contabilizarse de nuevo el término de prescripción a partir del reclamo por un tiempo igual al señalado legalmente.

Pues bien, en el presente asunto se tiene que el derecho pensional se causó desde el **28 de julio de 2005**, pero habiendo continuado el demandante con el pago de aportes, como se dijo, la prestación iniciaba su disfrute a partir del **1 de agosto de 2010**.

De otro lado, como la controversia radica en la excepción de prescripción, para resolver el interrogante planteado, se tiene que el demandante hizo varias solicitudes pensionales, así:

- El **05-08-2005** el demandante solicitó la pensión de vejez, siendo negada por **resolución 1505 del 27-03-2006**, a falta del requisito de semanas mínimas<sup>3</sup> (archivo 16, página 43).
- El **15-11-2006** el demandante solicitó nuevamente la pensión de vejez, siendo negada por **resolución 402 del 29-01-2001**, a falta del requisito de semanas<sup>4</sup> mínimas (archivo 16, página 44). La revocatoria directa solicitada frente a dicho acto administrativo, por iguales razones, fue negada por **resolución 2560 del 03-05-2010** (archivo 16, página 162).
- El **08-05-2012** el demandante reiteró su solicitud pensional, siendo expedida la **resolución 224293 del 02 septiembre de 2013** (archivo 16, página 455) confirmada por la **resolución GNR47706 del 20-02-2014** se negó nuevamente la pensión de vejez en razón a que no acreditaba el mínimo de semanas cotizadas (archivo 16, página 417) y ratificada por la **resolución VPB9015 del 05-02-2015** (archivo 16, página 426).

---

<sup>3</sup> Se indicó que contaba con 445 de las 500 mínimas

<sup>4</sup> Se indicó que contaba con 445 de las 500 mínimas

- El **23-09-2013** el accionante solicitó la pensión (archivo 16, página 550)
- El **14-03-2018** el accionante reitera su solicitud pensional, siendo negada por **resolución SUB86908 del 03-04-2018** a falta de acreditación del mínimo de semanas (archivo 16, página 431), confirmada por la **resolución SUB224915 del 23-08-2018** (archivo 16, página 441).

La parte demandante cuestionó la decisión de la a-quo de declarar probada la excepción de prescripción para aquellas mesadas causadas con antelación al **16 de agosto de 2016**, porque considera que debía tenerse en cuenta que Colpensiones no cumplió con la obligación de la debida custodia de las historias laborales, por lo que a su juicio existió confusión respecto del número de semanas contabilizadas.

Frente a lo discurrido, debe tenerse en cuenta que en ese caso se presentaron varias solicitudes pensionales y si bien, todas ellas aseguraban que el demandante contaba con el rigor mínimo de semanas (500 en los últimos 20 años al cumplimiento de la edad), lo cierto es que así se hubiere contabilizado los periodos en mora en que Colpensiones no ejerció la obligación de cobro, el resultado era igual porque con solo esos aportes, al demandante no alcanzaba el mínimo de las 500 semanas, tanto así que en el hecho 14 de la demanda, confiesa el demandante que ante las negativas obtenidas – siendo la última la realizada el 14-03-2018 -, se detuvo el actor a estudiar su historia laboral encontrando inconsistencia entre 1992 y 1996, interregno donde se pudo observar la falta de afiliación por parte del empleador, aspecto que solo con la demanda vino a reclamar y con esos 80.71 semanas adicionales, es que lograba alcanzar el rigor mínimo, esto es, a través del título pensional que debe cancelar el empleador omisivo.

Significa lo anterior que habiendo transcurrido más de tres años entre la primera reclamación – que interrumpe el término de prescripción por una sola vez – y la demanda, el hito de contabilización resulta ser esta última la cual data del **16-08-2019** (archivo 5), por tanto, la prescripción operó frente a las mesadas causadas con anterioridad al 16-08-2016, tal y como lo estableció la A-quo, razón suficiente para confirmar la sentencia en este aspecto en particular.

### **Del retroactivo pensional.**

En cuanto al retroactivo, el accionante tiene derecho a las mesadas adicionales de junio y de diciembre, comoquiera que la prestación se causó antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 y el monto mensual de la prestación no supera los tres salarios mínimos mensuales legales vigentes.

De otro lado, teniendo en cuenta la excepción de prescripción que afectó las mesadas causadas con anterioridad al 16 de agosto de 2016, se tiene que realizados el juzgado de primera instancia al realizar las operaciones aritméticas del retroactivo hasta la fecha de corte tomado por la primera instancia que fue el 06-12-2022, el arribó a un total de \$72.959.702<sup>5</sup>, cuando el valor que correspondía era por \$74.808.975 (**ver cuadro 01**), gravitando la diferencia en que para el año 2022, la primera instancia aplicó el salario mínimo equivocado (\$859.584) cuando en realidad corresponde a \$1.000.000,

---

<sup>5</sup> Ver archivo 70

por lo que el valor por ese año hasta el 06-12-2022 era de \$13.170.000 y no de \$11.320.727.

No obstante, dicho valor se mantendrá al no haber sido objeto de apelación por la parte interesada y por operar el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones.

Ahora, actualizado el retroactivo al 30 de agosto de 2023, se tiene que lo adeudado a dicha calenda asciende en total a **\$84.229.702** (Cuadro 02), sin perjuicio de aquellos valores que se continúen generando y los descuentos que corresponden al sistema de salud.

<b>Cuadro 01</b>					<b>Cuadro 02</b>				
<b>TOTAL RETROACTIVO</b>									
Desde	Hasta	Mesada	# Mesadas	Ordinaria	Desde	Hasta	Mesada	# Mesadas	Ordinaria
16-ago.-16	31-dic.-16	689.455	5,47	3.771.319	7-dic.-22	30-dic.-22	1.000.000	0,83	830.000
1-ene.-17	31-dic.-17	737.717	14,00	10.328.038	1-ene.-23	30-ago.-23	1.160.000	9,00	10.440.000
1-ene.-18	31-dic.-18	781.242	14,00	10.937.388	SUB TOTAL				11.270.000
1-ene.-19	31-dic.-19	828.116	14,00	11.593.624	LIQUIDADO HASTA EL 06-12-2022				72.959.702
1-ene.-20	31-dic.-20	877.803	14,00	12.289.242	<b>TOTAL AL 30-08-2023</b>				<b>84.229.702</b>
1-ene.-21	31-dic.-21	908.526	14,00	12.719.364					
1-ene.-22	6-dic.-22	1.000.000	13,17	13.170.000					
<b>Total</b>				<b>74.808.975</b>					

### **Del término para iniciar el pago de las mesadas.**

Establece el parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, para efecto del cómputo de las semanas, entre otras, se tiene en cuenta el tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador – como aquí sucede –, caso en el cual, dicho cómputo se hace procedente siempre y cuando el empleador traslade, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora.

Ahora, dicho precepto de manera alguna supedita el pago de la prestación al momento de pago del cálculo actuarial, teniendo en cuenta que la omisión y la falta de afiliación tienen un similar tratamiento porque las entidades de seguridad social continúan a cargo del reconocimiento de las prestaciones y además cuentan con los mecanismos coactivos para su cobro y, tal hipótesis asegura la efectividad del derecho fundamental a la pensión, así como a los principios de la seguridad social, aspectos todos estos que lo devela la sentencia SL143388/2015, SL051-2018 reiterada en la SL233/2020, así:

“[...] Ahora bien, aquí y ahora, para la Corte resulta preciso reivindicar la mencionada orientación y evolución en su jurisprudencia, pues el mencionado traslado de responsabilidades entre entidades de la seguridad social – para pago de las pensiones - y empleadores – para pago de cálculos actuariales -, es el que resulta más adecuado a los intereses de los afiliados y el más acoplado a los objetivos y principios del sistema de seguridad social.

Por otra parte, para la Corte la solución a situaciones de omisión en la afiliación que se ha venido reseñando resulta eficiente, por otra parte, para la Corte la solución a situaciones de omisión en la afiliación que se ha venido reseñando resulta eficiente, pues reconoce prioritariamente el trabajo del afiliado, como base de la cotización, a la vez que garantiza el reconocimiento oportuno de las prestaciones, sin resquebrajar la estabilidad financiera del sistema, ya que se propende por la integración de los recursos por parte de los empleadores, con instrumentos como el cálculo actuarial y

herramientas de coacción como las que tienen legalmente las entidades de seguridad social.

De igual forma, para la Corte, esta orientación es la respuesta más adecuada a los intereses de los afiliados, pues se les garantiza el pago de sus prestaciones a través de entidades del sistema de seguridad social, que tienen una mayor solidez financiera, vocación de permanencia y estabilidad, a la vez que una menor volatilidad que la que pueden tener determinadas empresas.

Dicho ello, la Sala reitera que, ante hipótesis de omisión en la afiliación del trabajador al sistema de pensiones, es deber de las entidades de seguridad social tener en cuenta el tiempo servido, como tiempo efectivamente cotizado, y obligación del empleador pagar un cálculo actuarial, por los tiempos omitidos, a satisfacción de la respectiva entidad de seguridad social. (negritas fuera del texto).”

Más adelante, en sentencia SL3154-2021 en un caso similar, la Corte decidió revocar la decisión del Tribunal y dejar incólumes los numerales de la providencia del Juzgado que reconocieron la prestación sin condiciones, eso sí, sin relevar la obligación del empleador a pagar a Colpensiones el cálculo actuarial correspondiente. En dicha sentencia aclaró que no se puede condicionar el reconocimiento de la prestación al pago del cálculo actuarial y expresó: **“(...) el ad quem incurrió en los desaciertos jurídicos endilgados por la censura, por cuanto resulta inadmisibles que hubiese condicionado la preservación del régimen de transición del promotor del litigio y, por contera, el reconocimiento de la pensión de vejez, al pago del título pensional.”**

Bajo tales parámetros jurisprudenciales es que le asiste la razón al demandante en su apelación, en cuanto al condicionamiento en el reconocimiento de la prestación, máxime cuando es deber de Colpensiones tener en cuenta el tiempo servido como efectivamente cotizado, reconociendo prioritariamente el trabajo del afiliado y el pago oportuno de las prestaciones, sin que ello, ponga en peligro la estabilidad financiera del sistema, ya que se integran los recursos por parte de los empleadores, con instrumentos como el cálculo actuarial y herramientas de coacción.

Así las cosas, se deberán modificar los numerales cuarto y sexto de la sentencia en cuanto supeditó la prestación al pago del cálculo actuarial, para en su lugar, eliminar tal condicionamiento.

### **De los intereses moratorios.**

Recorre la parte actora, la decisión de la A-quo en no dispensar condena por intereses moratorios en los demandados, justificando ello en los perjuicios que genera la mora en el trámite.

Para iniciar, debe decirse que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a cargo del empleador no pueden ser dispuestos, en primer lugar, porque ello no fue contemplado como pretensión en el texto de la demanda y, en segundo lugar, lo adeudado por el empleador Germán Londoño y que se ordenó pagar según el cálculo actuarial que para el efecto realice el fondo de pensiones, al ser un concepto generado por la falta de aportes – no por la falta de pago de las mesadas -, no le son aplicables los intereses del art. 141 de la Ley 100/93.

Ahora, comoquiera que la recurrente alega como razón para que le sean reconocidos los intereses de mora los perjuicios al demandante por la mora en el reconocimiento y pago de la pensión, al respecto debe decirse que éstos al ser de naturaleza resarcitorio y no sancionatoria. Sin embargo, la jurisprudencia ha planteado que dichos intereses no son viables en ciertos eventos, tema sobre el cual, la Corte en la sentencia SL160/2023 que reitera la SL2772-2021, indicó:

“[...] la Sala ha referido que los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no tienen carácter sancionatorio sino resarcitorio, pues proceden a fin de aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la tardanza del deudor en el cumplimiento de las obligaciones, con independencia de las razones que se aduzcan en sede administrativa.

Sin embargo, esta no es una regla absoluta, en tanto la Corte ha reconocido supuestos en los cuales no cabe una condena por tal concepto, porque la negativa se encuentra plenamente justificada (CSJ SL704-2013). El primero, cuando en sede administrativa hay controversia legítima entre potenciales beneficiarios de la pensión de sobrevivientes (CSJ SL14528-2014). Y, el segundo, cuando la actuación de la administradora estuvo amparada en el ordenamiento legal vigente al momento en que se surtió la reclamación, y después se reconoce la pensión en sede judicial con base en criterios de origen jurisprudencial (CSJ SL787- 2013).

En el sub lite, como acaba de verse, la actuación de la administradora tenía plena justificación, pues, de una parte, cuando el actor deprecó el derecho pensional ante ella, no había cumplido la edad mínima exigida y si bien esta se satisfizo el 15 de abril de 2018, la densidad de las cotizaciones no era suficiente para el reconocimiento del derecho, solo en virtud de un cambio jurisprudencial sobre la obligación de cubrir dicho cálculo actuarial y la orden impartida en este juicio sobre su cancelación, pueden darse por satisfechas las semanas requeridas, por manera que no hay lugar a los intereses de mora pretendidos”.

Aplicando lo anterior al caso, es menester precisar que, para disponer la orden al empleador de pagar el título pensional por los períodos durante los cuales el actor no fue vinculado al Sistema General de Pensiones, es necesario que el interesado primero acredite que en efecto laboró al servicio del empleador que omitió la afiliación, y solo así, es que se origina el derecho a que se computen como válidos los períodos alegados para efectos de la acreditación de los requisitos para obtener una pensión de vejez, es un aspecto que permite afirmar que la negativa de Colpensiones se produjo con amparo en el ordenamiento legal aplicable, en la medida que el accionante no acreditaba el derecho pensional cuando lo solicitó al demandado y, únicamente lo logra acreditar en virtud del título pensional ordenado. De allí, es que emerge la imposibilidad de aplicar los intereses moratorios.

En virtud de lo anterior, lo que se hará es disponer la indexación de lo adeudado desde la exigibilidad de cada una de las mesadas hasta que se realice el pago efectivo, a efectos de compensar el efecto inflacionario que sufre el valor de las obligaciones adeudadas con el simple transcurrir del tiempo, razón por la cual se adicionará la sentencia en este sentido.

En cuanto a las costas, recurre la parte actora el hecho de no haberse dispuesto condena a cargo de Colpensiones al considerar que el hecho de haberle hecho incurrir al demandante en desinformación y en errores, ocasionando un despliegue administrativo por espacio de 10 años, era una razón para dispensar condena por ese concepto. Al respecto, debe decirse que, en este caso Colpensiones incurrió en la omisión de gestionar el cobro de algunos periodos que se encontraban en mora por parte del empleador, por lo que resultó condenada a reconocer ciclos de cotización para ser contabilizados como tiempos efectivos en la historia laboral, a pesar de haberse configurado el derecho pensional en virtud del cálculo actuarial a cargo del empleador, ello es suficiente para considerar que hay lugar a condenar en costas, conforme lo autoriza el numeral 5 del artículo 365 CGP, pero en una proporción del 10% de las causadas. Por lo anterior, se modificará la sentencia de primera instancia en ese sentido.

En cuanto a las costas en segunda instancia, al haber prosperado parcialmente el recurso incoado por Germán Londoño Monroy, en esta instancia no se le condenará en costas y, respecto de Colpensiones, en esta instancia se le impondrán costas a favor de la parte actora.

## VI. DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

### RESUELVE:

**PRIMERO: MODIFICAR** los ordinales primero, segundo, tercero y cuarto de la parte resolutive de la sentencia, los cuales quedarán así:

***“PRIMERO: DECLARAR** que entre **JUAN EUCLIDES ACEVEDO** y los señores **GERMAN LONDOÑO MONROY**, existió una relación laboral entre el 31 de diciembre de 1992 y el 18 de julio de 1994, periodo en el cual el empleador omitió afiliar al demandante al sistema de seguridad social en pensiones.*

***SEGUNDO: CONDENAR** al señor **GERMAN LONDOÑO MONROY** al pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, desde el 31 de diciembre de 1992 al 18 de julio de 1994 a favor del señor **JUAN EUCLIDES ACEVEDO MOLINA**, mismos que deberán ser cancelados sobre un IBC del salario mínimo para cada anualidad y ante la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, según el cálculo actuarial que para el efecto realice ésta última.*

***TERCERO: ORDENAR** a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, incluir en la Historia laboral del demandante **JUAN EUCLIDES ACEVEDO MOLINA**, los periodos que aparecen en mora de su empleador **LUIS ALBERTO LONDOÑO MONROY**, correspondiente a los periodos de junio a agosto de 1996, conforme a lo dicho en la parte motiva.*

**CUARTO: ORDENAR** a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, incluir en la historia laboral del demandante los tiempos que corresponden a los periodos que deberá cancelar mediante calculo actuarial el señor GERMAN LONDOÑO que van desde el 31-12-1992 y el 18-07-1994, teniendo en cuenta el salario mínimo de cada anualidad, conforme a lo indicado en la parte motiva”.

**SEGUNDO: MODIFICAR** el ordinal sexto de la parte resolutive de la sentencia, los cuales quedarán así:

**SEXTO: CONDENAR** a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** al reconocimiento a favor del señor **JUAN EUCLIDES ACEVEDO MOLINA**, de la pensión de vejez a partir del **1 de agosto de 2010**, bajo los parámetros del acuerdo 049 de 1990, en cuantía del salario mínimo que para el año 2010 ascendía a la suma de \$515.000, la cual deberá ser incrementada anualmente conforme lo determine el Gobierno Nacional, con derecho a 14 mesadas pensionales al año.

**TERCERO: ADICIONAR** el ordinal octavo de la sentencia, en el sentido de disponer que el valor del retroactivo actualizado al 30 de agosto de 2023 corresponde a la suma de **\$84.229.702**, sin perjuicio de que se continúe generando. Respecto de dicho retroactivo, se dispone la indexación desde la exigibilidad de cada una de las mesadas hasta que se realice el pago efectivo.

**CUARTO: REVOCAR** el ordinal noveno de la parte resolutive de la sentencia, por las razones expuestas.

**QUINTO: MODIFICAR** el ordinal décimo primero de la sentencia, en el sentido de disponer CONDENA en costas a cargo de Colpensiones en un 10% de las causadas. En lo demás, se mantiene incólume.

**SEXTO: CONFIRMAR** la sentencia en lo demás.

**SÉPTIMO: COSTAS** en esta instancia a cargo de Colpensiones a favor de la parte actora. Sin costas respecto de los demás.

#### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Los magistrados,

**GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO**

**OLGA LUCIA HOYOS SEPÚLVEDA**

**JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ**

Con Salvamento de Voto Parcial

**Firmado Por:**

**German Dario Goez Vinasco  
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional  
Sala 003 Laboral  
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda**

**Julio Cesar Salazar Muñoz  
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional  
Sala 002 Laboral  
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda  
Firma Con Salvamento Parcial De Voto**

**Olga Lucia Hoyos Sepulveda  
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional  
Sala 004 Laboral  
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda  
Firma Con Aclaración De Voto**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4d66846712622d6428838095f10baca780b5e9880198a607bb1d3653396ffcd8**

Documento generado en 07/12/2023 11:55:26 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**